

PRESENTACIÓN
MÁS ALLÁ DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS
SOBRE LA NATURALEZA:
LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE GUERRA,
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Martha Cárdenas
Manuel Rodríguez Becerra
Editores

Las imágenes que muchos colombianos y observadores internacionales parecen tener sobre las relaciones entre guerra y medio ambiente, suelen referirse a los impactos de las acciones bélicas, de los sabotajes y del terrorismo sobre los ecosistemas y los paisajes donde se ubican los oleoductos o las torres de conducción eléctrica objetos de las anteriores; o a los efectos devastadores sobre los bosques, ríos y fuentes de agua, de la implantación de monocultivos ilícitos de coca y amapola, y de las fumigaciones que buscan erradicarlos; pero las vinculaciones entre todos estos fenómenos están lejos de agotarse en dichas consecuencias inmediatas, y se remontan a relaciones de causalidad más complejas, hasta proyectarse a través de procesos y fenómenos más diversos que es necesario analizar, tal y como se lo propone precisamente

este libro, en el cual se reúnen diez artículos que intentan dilucidar las complejas relaciones entre medio ambiente, sociedad, guerra y paz.

En su conjunto, todos ellos se elaboraron como aproximaciones a las respuestas posibles de varias preguntas centrales: ¿En qué medida factores de carácter ambiental han sido parte de las causas de la guerra, y en qué grado la han favorecido u obstaculizado? ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra para el medio ambiente? ¿Cuáles son los impactos del negocio del narcotráfico –un fenómeno que hoy está tan íntimamente ligado con la guerra–, para el medio ambiente? ¿Qué relaciones existen entre los conflictos sociales y los ambientales –tales como los aplazados procesos de reforma agraria y de reordenamiento territorial en el país, la inequidad social, ecológica, económica y cultural, o la impunidad–, y cómo inciden en la guerra? ¿Cómo se relacionan los factores ambientales con aquellos de naturaleza social, económica y política que diversos estudios han identificado para explicar el origen y la génesis del conflicto? ¿Cómo se podría incorporar el medio ambiente en el proceso de construcción de la paz; y en qué medida la conservación y uso sostenible de los recursos naturales puede contribuir a la resolución de los conflictos sociales, y a la construcción de una sociedad equitativa en sus relaciones políticas y con la naturaleza?

La forma como están formuladas estas preguntas podría suscitar en muchos la impresión de que tienen un excesivo énfasis ambientalista; sin embargo, la lectura de los ensayos indica que sus autores, así como los editores de este libro, parten del supuesto de que existe una estrecha relación entre las diferentes dimensiones sociales presentes en los modelos ambientales, culturales, políticos y económicos vigentes; y que las causas profundas de la

guerra no pueden entenderse ni explicarse sino a partir del descubrimiento de las complejas interrelaciones entre los mismos. El título mismo del libro, “Guerra, sociedad y medio ambiente”, expresa la orientación fundamental de la presente obra.

Pero el asunto se proyecta mucho más allá de las primeras impresiones mencionadas. Con la formulación de las anteriores preguntas, se ha querido llamar la atención sobre el hecho de que la casi totalidad de los estudios sobre el conflicto armado en Colombia, así como las diversas aproximaciones adoptadas por los diferentes gobiernos para alcanzar la paz, o para hacer la guerra, no han tomado suficientemente en cuenta al tema ambiental, y con mucha frecuencia lo han ignorado, tal y como lo han hecho la mayor parte de quienes se han acercado al asunto desde otros ámbitos globales. Incluso el tema está ausente o ha sido marginalmente tratado dentro de los análisis del problema del narcotráfico, capítulo considerado como prioritario en la reflexión sobre el conflicto colombiano que ha impuesto en particular el gobierno de los Estados Unidos.

MARGINALIDAD DE LO AMBIENTAL EN EL TRATAMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Como lo indica Germán Andrade en su artículo incluido en este volumen, “en los escenarios internacionales donde se maneja lo ambiental—Cambio Climático, Desarrollo Sostenible, Diversidad Biológica, etc.—, durante años sobresalió la forma marginal como se tratan los temas de cultivos ilícitos y conflicto armado, en relación con el ambiente. En el Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad de 1997, se incluyeron aspectos de los cultivos ilícitos y el conflicto armado como causa directa de la pérdida de la biodiversidad, pero el texto es muy sucinto (11 páginas), y es

independiente del contenido técnico del resto del informe de 200 páginas. Igualmente, en la primera comunicación nacional sobre cambio climático, el análisis sobre el cambio de uso de la tierra y la estructura del campo colombiano, toca solamente los sectores formales de la economía. (...) sólo hasta 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, el gobierno de Colombia presentó en un foro ambiental su posición sobre la erradicación, la cual generó controversia por parte de organizaciones ambientalistas, y posiciones diferentes de los gobiernos de Perú y Ecuador. Claramente el discurso ambiental del gobierno colombiano aparece como debilitado, o al menos supeditado a la aplicación de sus políticas de seguridad”.

En los diferentes capítulos de este libro se señalan en forma explícita o implícita los problemas que surgen cuando no se incorpora en forma adecuada el tema ambiental en las propuestas de diagnóstico y resolución del conflicto armado en Colombia. Es obvio tanto para los académicos como para quienes actúan directamente en los procesos de búsqueda de la paz, que de un diagnóstico incompleto sólo se pueden esperar soluciones incompletas, e incluso perversas; las experiencias del posconflicto en Nicaragua, Guatemala y el Salvador son bien aleccionadoras en este sentido: los daños ambientales durante dicho periodo han sido graves, y eventualmente superiores a los acontecidos durante la guerra, como consecuencia de los procesos desordenados de apertura de la frontera agrícola a que ha dado lugar. Una adecuada incorporación de lo ambiental en los procesos de negociación de la paz en esos países no sólo hubiese podido evitar esa situación, sino posiblemente habría logrado una adecuada restauración de los daños producidos por la guerra.

BAJA PRIORIDAD DE LO AMBIENTAL EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE COLOMBIA

En el caso de Colombia, no es extraño que lo ambiental tenga una consideración menor en las teorías, investigaciones, discursos y opiniones sobre la guerra, porque a pesar de la mayor conciencia hoy existente en la población sobre la importancia de lo ambiental y el hecho de que el tema haya sido crecientemente incorporado en la agenda pública, éste ocupa aún un lugar marginal en el ámbito de las preocupaciones de los grupos dirigentes del país. Una ilustración de esta afirmación la constituye el declive registrado en la agenda del gobierno del presidente Álvaro Uribe durante su primer año de mandato. A principios de los años noventa el país se embarcó en una ambiciosa reforma ambiental, a tono con la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en consonancia con las positivas expectativas generadas por la expedición de la nueva Constitución y por las perspectivas entonces existentes sobre el crecimiento económico en la década que se iniciaba; y durante los gobiernos de los presidentes Gaviria, Samper y Pastrana se hicieron notables avances en la gestión ambiental, como se reconoció en el ámbito internacional (Rodríguez, B., 2002). En general, los ambientalistas y representantes de diversos sectores no gubernamentales al hacer un balance de la administración del Presidente Uribe han considerado que se ha presentado un retroceso en la política ambiental en comparación con los tres gobiernos anteriores (Santamaría, 2003), un punto de vista que fue acogido y sintetizado en editorial del diario *El Tiempo* al finalizar el año 2003.

Pero quizá lo que resulta más preocupante es que a pocos colombianos parece preocuparles asuntos como el descrito. El país parece vivir a la moda y al son de los intereses de los países del norte. Cuando el tema ambiental estuvo en la cúspide de las prio-

ridades globales a principios de los noventa, se ofreció una positiva respuesta; ahora que ha cedido en importancia ante los imperativos de la “lucha contra el terrorismo internacional” y del cambio de agenda norteamericana, la política gubernamental le resta importancia a lo ambiental. No parecería entenderse que allí reside uno de los fundamentos del desarrollo futuro del país, dada la enorme riqueza con que cuenta en materia de diversidad biológica en relación con los otros países del mundo.

Tan preocupante como la anterior tendencia, es el hecho de que el tema ambiental ocupe un lugar tan marginal en la consideración de la mayor parte de los economistas y científicos sociales que más influyen en el devenir de Colombia. Muchas veces el tema simplemente se omite, como ocurrió en el caso de la colección de ensayos “Pensar a Colombia”. Éste es el producto de los “Talleres del Milenio”, una ambiciosa iniciativa coordinada por el economista Luis Jorge Garay, en la cual participaron un grupo de 30 especialistas, académicos y diseñadores de políticas públicas. A partir del reconocimiento de la crisis general de la sociedad colombiana se plantea la necesidad de construir un nuevo pacto social. Por la calidad de algunos de sus diagnósticos y propuestas en los campos político, social y económico es una contribución que servirá como una de las referencias obligadas para la superación de la actual situación. Pero los planteamientos presentados para repensar al país no otorgan a lo ambiental ningún lugar, más allá de unas inevitables y fugaces alusiones. Es una protuberante fisura que deberá ser llenada si se acepta que un ejercicio de esta naturaleza debería partir del entendimiento de que la economía humana es un subsistema de la ecoesfera, una visión que muchos grupos de la inteligencia de otras latitudes han incorporado desde hace más de dos décadas.

A pesar de todo ello, con frecuencia la retórica sobre el medio ambiente y el desarrollo sostenible es utilizada por igual por políticos, académicos y empresarios, y de ese modo parece haberse creado la ilusión de que son temas que ya ocupan su justo lugar en la agenda pública. Precisamente la marginalidad de lo ambiental en la consideración de la guerra es una evidencia más del papel menor que ocupa dentro las preocupaciones de los colombianos, a pesar de la fuerza de muchas experiencias y procesos en marcha en diversas localidades del país, en las cuales la base natural y los modelos de uso de los recursos naturales son el eje de las resistencias a la degradación de la guerra, o a ésta misma como tal. Son un buen ejemplo los casos de la resistencia indígena en el norte del Cauca y en otros ámbitos, o los esfuerzos campesinos en el Putumayo, en el Magdalena Medio o en el Sur de Bolívar (ver ensayo de César Ortiz, en este volumen), entre otros; todos ellos buscan combinar cultura, territorio y organización comunitaria, en la construcción de relaciones regionales de producción sostenible y convivencia pacífica.

MEDIO AMBIENTE Y CONFLICTO

Mediante este libro intentamos contribuir en algo a superar esta situación, bajo el criterio general de la pertinencia de la siguiente pregunta: ¿En qué medida el medio ambiente es un factor que puede explicar los conflictos al interior de los países o entre ellos, incluyendo las guerras?

Con el surgimiento del ambientalismo en los ámbitos global y nacional, a finales de los años sesenta y principios de los años setenta, se observan intentos de resolver esta pregunta por parte de expertos pertenecientes a diversas disciplinas; pero hay que

recordar que este tema ha sido examinado desde hace siglos, primero por pensadores políticos, filósofos, estrategas militares, e historiadores, y más recientemente por los científicos sociales contemporáneos.

EL MEDIO AMBIENTE Y EL ORIGEN DE LAS GUERRAS INTERESTATALES

Desde los primeros historiadores de la antigüedad, como Heródoto, conocemos que con mucha frecuencia las conquistas territoriales realizadas por un Estado sobre otro, así como las guerras, fueron motivadas por el control sobre determinados recursos naturales - fuentes de agua, tierras fértiles, minerales-, un fenómeno que encontramos hasta nuestros días. Algunas de las mayores guerras del siglo pasado fueron motivadas en parte por el deseo de un país de capturar los recursos naturales no renovables de otro. Antes de la Segunda Guerra Mundial estalló el conflicto Sino-Japonés como resultado de las acciones de este último país para tomar control sobre el carbón y otros minerales ubicados en el territorio de aquel y en el sudeste de Asia; y el ejército de Hitler se dirigía al Cáucaso con el objetivo de tomar control de los campos petroleros cuando fue derrotado en Stalingrado en 1942. Más recientemente, en el año 2003, la guerra de Irak detonada por los Estados Unidos bien parece tener como una de sus causas principales el control de una de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta, un asunto que parece haber adquirido mayor claridad ante el no hallazgo de las armas de destrucción masiva que sirvieron de mascarón de proa para invadir aquel país. Diez años antes, la guerra del Golfo fue encendida por Irak al invadir Kuwait con el fin de controlar sus ricos yacimientos petroleros. El origen y génesis de este tipo de guerras ha sido objeto de análisis a partir de los paradigmas provistos por las teorías sobre relaciones internacionales.

Así, las guerras interestatales contemporáneas por los recursos naturales han estado centradas predominantemente en el control de los no renovables, y no tanto en torno a los recursos naturales renovables, y es muy poco probable que éstos susciten nuevos conflictos en el presente, excepción hecha del caso del agua. Ello en contraste con los siglos xvii, xviii y xix cuando, por ejemplo, las potencias europeas se vieron inmersas en graves conflictos, muchas veces armados, como consecuencia de la escasez de madera para la construcción de navíos. La guerra del opio detonada por la corona británica en China, fue uno de los capítulos más dramáticos y oscuros de la historia de los dos últimos siglos en relación con el control del comercio de un producto agrícola.

En los últimos años se ha afirmado, una y otra vez, que en el siglo xxi el agua será una de las causas primordiales de la guerra entre los Estados, quizá mucho más que las generadas por el control sobre los hidrocarburos y los minerales; sin embargo, para que los conflictos inherentes en el uso de una fuente de agua compartida por dos países dé lugar a una guerra se requieren un conjunto de condiciones que en la práctica se cumplen en muy pocas situaciones: el país aguas abajo debe encontrarse agudamente afectado por los usos del país de la parte alta de la cuenca, y al mismo tiempo debe estar en capacidad militar para declararle la guerra a éste, es decir tener una superioridad bélica indiscutible; además de que debe existir una tradición de guerra, o por lo menos de un fuerte antagonismo entre los dos países.

Adicionalmente, la evidencia indica que es poco probable que se desate una guerra internacional a causa del agua, como lo indica un completo estudio sobre la materia (Wolf, 1997): De 412 crisis internacionales registradas entre 1918 y 1994 solamente 7 fueron detonadas por problemas del agua; en contraste, existe amplia

evidencia sobre conflictos violentos generados a nivel subnacional por el control sobre este recurso. Aquellos generados en muchos países por la reubicación de poblaciones como consecuencia de la construcción de grandes represas para generación eléctrica, los grandes acueductos municipales y otros usos, son una ilustración que viene al caso.

EL MEDIO AMBIENTE EN EL ORIGEN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO SUB-NACIONAL

Así como el control por el agua ha sido un factor que con frecuencia se identifica como una de las causas de conflictos de diversa naturaleza, incluyendo los violentos, a nivel sub-nacional se hace la misma identificación con los otros recursos naturales renovables, en particular la flora, la fauna y el suelo. Precisamente el politólogo canadiense Thomas Hommer Dixon (1999), desarrolló un modelo interpretativo de esta relación a partir de la síntesis de un amplio número de trabajos de investigación sobre la materia adelantados en países de las diversas regiones del mundo, renovando los análisis tradicionales de los conflictos en torno a la tierra, con las dimensiones ambientales de sus causas. Según este autor, existe una creciente evidencia a nivel global sobre la forma como la escasez de los recursos naturales renovables contribuye a generar o agravar conflictos violentos, que incluyen la insurgencia y los enfrentamientos étnicos. Al observar que en el pasado reciente la escasez ambiental ha contribuido a detonar la violencia, prevé que en las próximas décadas la incidencia de tal violencia probablemente se incrementará en la medida en que se haga más grave la escasez del agua fresca, de los bosques, y de la tierra para la agricultura y la construcción de vivienda. Esta escasez tiene, a su vez, tres causas principales: a) la degradación y des-

trucción de los recursos naturales renovables; b) la creciente demanda de estos recursos, y c) su inequitativa distribución.

Estos tres tipos de escasez a menudo interactúan y se refuerzan, distinguiéndose dos clases de interacción especialmente importantes: la captura de los recursos y la marginalización ecológica. La primera ocurre cuando la degradación y destrucción de los recursos renovables interactúa con el crecimiento poblacional para estimular a los grupos poderosos dentro de la sociedad a desviar la distribución de los recursos a su favor; lo cual a su vez intensifica la escasez para los grupos más pobres y débiles dentro de la sociedad. La marginalización ecológica tiene lugar cuando el acceso desigual a los recursos se combina con el crecimiento poblacional para causar migraciones de grupos poblacionales que dependen de los recursos renovables para su supervivencia, los cuales se mueven a regiones ecológicamente frágiles tales como los bosques húmedos tropicales y tierras montañosas de alta pendiente. Con frecuencia, la acción sobre estos ecosistemas causa su degradación o destrucción que dispara nuevamente la migración y, eventualmente, nuevos procesos de deterioro. Algunos grupos de marginados ecológicos migra a las ciudades, en donde a menudo se asientan en áreas no aptas para la urbanización y vulnerables a desastres ambientales.

El papel de la escasez ambiental en la generación de la violencia es a menudo oscuro e indirecto y produce efectos sociales acumulativos e insidiosos, tales como grandes migraciones y dislocaciones económicas que a su vez conducen al conflicto abierto y a los enfrentamientos armados; o afecta sistemas político-ecológicos extremadamente complejos, y no es, por sí misma, suficiente para causar la violencia: La investigación ha mostrado que cuando contribuye a la generación de la violencia, siempre lo

hace en interacción con otros factores económicos, políticos y sociales. Precisamente para ilustrar su modelo Hommer-Dixon toma diversos casos a nivel internacional, entre los cuales, con referencia a Latinoamérica, se encuentran los de Chiapas y Sendero Luminoso. Otro estudioso del tema, J. Kasana (2002), a partir de este modelo ofrece una nueva perspectiva de análisis del conflicto de Rwanda, al intentar mostrar las implicaciones políticas y sociales de la escasez ambiental y cómo ellas se relacionan con el violento conflicto de 1994.

SEGURIDAD NACIONAL Y GLOBAL Y MEDIO AMBIENTE

De otra parte, académicos y políticos, a partir de los impactos efectivos y potenciales de la guerra sobre el medio ambiente, han propuesto el tema fundamentalmente en términos de la seguridad nacional. Hay que recordar que en la época contemporánea esta preocupación surgió con bastante fuerza después de la Segunda Guerra Mundial: en 1949 se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Conservación de los Recursos Naturales, convocada para intercambiar ideas y experiencias sobre el papel que podrían jugar estos recursos en la reconstrucción de las áreas devastadas por la guerra, así como sobre el desarrollo continuo y la amplia aplicación de técnicas para su conservación y uso adecuado. La resolución que convocó a dicha conferencia, determinó la competencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre los asuntos ambientales, no prevista puntualmente en la Carta de la Organización, constituyéndose en un hecho que a la postre condujo a las Conferencias de Estocolmo, en 1972, y Río de Janeiro en 1992, así como a otras acciones de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, tales como la atención prestada por la Asamblea de las Naciones Unidas a los efectos de los ensayos nucleares

sobre la atmósfera, que significó el inicio de las acciones internacionales dirigidas a enfrentar los efectos ambientales de la actividad militar (Sands, 1994).

El tema de la seguridad global y nacional y el medio ambiente tomaría fuerza en las décadas siguientes, en la medida en que las amenazas ambientales originadas por la acción humana se incrementaron y sus consecuencias se hicieron más evidentes: la deforestación, la pérdida de los suelos, el aumento del número de especies de flora y fauna amenazadas de extinción y la destrucción y degradación de diversos ecosistemas, la polución de las aguas continentales y del medio marino, el calentamiento global, y el declive de la capa de ozono.

La Comisión Brundlandt en 1987 se refirió a la situación en los siguientes términos: “La crisis del medio ambiente, cada vez más profunda y extensa, supone una amenaza para la seguridad nacional —e incluso para la supervivencia—, amenaza que puede ser mayor que la que suponen vecinos bien armados y mal dispuestos y alianzas poco amistosas. En varias zonas de América Latina, Asia y Oriente Medio, el medio ambiente se está convirtiendo ya en una fuente de inquietud política y de tensión internacional” (WCED, 1987).

A su vez, hoy se considera que el medio ambiente tiene grandes potencialidades para conservar y construir la paz (McNeely, 2002). Así se reconoce en múltiples tratados y acuerdos internacionales, tal como se establece en el preámbulo de la Convención de Biodiversidad: “La conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica fortalecerán las relaciones de amistad entre los Estados y contribuirán a la paz de la humanidad” (UN, 1992). En los últimos años, el tema de la seguridad ha ido evolucionando hacia aspectos más profundos relacionados con el desarrollo sos-

tenible y humano, el bienestar de los ecosistemas y la calidad de vida, tales como la soberanía y la seguridad alimentarias, o la seguridad de las poblaciones a partir de la vigencia de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (Mathew *et al.*, 2002).

ANTECEDENTES DE ESTE LIBRO: EL FORO NACIONAL AMBIENTAL

El Foro Nacional Ambiental (FNA), responsable de la edición de este libro, intenta contribuir a esclarecer y dar visibilidad a las relaciones medio ambiente–guerra. El FNA agrupa instituciones que han venido trabajando desde hace años en temas nacionales con especial interés por los problemas y temas ambientales, como la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, Fescol; la Fundación Alejandro Ángel Escobar; Tropenbos Internacional, Colombia; Ecofondo; Internacional Colombia GTZ, y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

El Foro nació en 1997 como una instancia de reflexión de carácter permanente que pretende otorgar a la sociedad civil un espacio de análisis sobre la política ambiental del país, realizar sugerencias para lograr una mejor integración de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo, y desencadenar un proceso de diálogo que produzca recomendaciones sobre medio ambiente y sostenibilidad, para que sean tenidas en cuenta en los procesos de formulación de políticas públicas y en los ámbitos decisorios de los demás sectores. El Foro surgió como respuesta a la ausencia de un espacio nacional de análisis y evaluación de las políticas públicas ambientales y sectoriales y de sus efectos.

En 1998, el Foro desarrolló las primeras actividades dirigidas a avanzar en la comprensión del conflicto armado en Colombia y

del significado que plantea el medio ambiente en el desarrollo del mismo como parte de la construcción de opciones para su superación. Se iniciaba entonces el proceso de negociaciones para la paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana y se consideró que el Foro podría hacer una contribución al mismo desde el ámbito del ambientalismo. Al contar entonces con alguna tradición en la reflexión y seguimiento de la política de bosques, y con el fin de efectuar una primera exploración, se realizó el seminario “Política de bosques, territorio y conflicto social” (Bogotá, 21 de octubre de 1998), así como un seminario virtual que diera la oportunidad de participar en esta reflexión a personas de fuera de Bogotá, el cual se denominó “Foro público sobre bosques y paz en Colombia” (noviembre de 1998). Las dos actividades en su conjunto contaron con la participación de cerca de cien personas provenientes de las más diversas disciplinas.

Desde entonces, y en forma paulatina, se fue conformando el programa “Guerra, paz y medio ambiente” que constituye hoy una de las tres líneas centrales de actividad del FNA, junto con “La política ambiental nacional” y “Relaciones internacionales y medio ambiente”. A finales del año 2001, se tomó una iniciativa dirigida a hacer una exploración más sistemática del tema que tuviera como fin último hacer más conscientes a diversos grupos relevantes a nivel nacional e internacional acerca de las relaciones medio ambiente – conflicto armado en Colombia, ofrecer más claridad sobre el caso colombiano a partir de su comparación con las experiencias de sociedades que han atravesado por conflictos de la misma naturaleza, y generar recomendaciones dirigidas a la etapa de posconflicto, que entonces se avizoraba más cercana que en la actualidad; la cual fue apoyada por el Centro Internacional de Investigaciones Forestales (CIFOR), cuyo actual director, David

Kaimowitz, ha sido un animador de las iniciativas del FNA desde el momento de su constitución cuando se desempeñaba exclusivamente como investigador de aquel centro. Kaimowitz (2002), hay que recordarlo, es un estudioso del tema que nos ocupa, como lo evidencian sus recientes trabajos sobre el particular.

Al iniciarse el proyecto se planteó que “la superación de las causas de este conflicto requiere aplicar iniciativas de distintos alcances dirigidas de una u otra manera a reorganizar y racionalizar la ocupación y el aprovechamiento del espacio y sus recursos: la distribución y uso de la tierra y el agua, los patrones de los asentamientos humanos, la inserción de la producción de origen agrícola en los mercados nacionales e internacionales. En la perspectiva del *posconflicto* será necesario también afrontar los efectos de la guerra, como son los desplazamientos masivos de población, el extenso y acelerado deterioro de ecosistemas frágiles (piedemonte e hilea amazónica, bosques de niebla, páramos) y la ocupación masiva de zonas de riesgo en asentamientos urbanos. En este contexto adquiere una gran importancia aprender de las experiencias logradas por distintas comunidades en el manejo de bosques, en la construcción de gobernabilidad y en la recuperación social en situaciones de posconflicto en zonas forestales y fortalecer la capacidad política, cultural y técnica de las comunidades como vía para ajustar y aplicar estas experiencias en el entorno colombiano” (FNA, 2001).

Como puede verse, los bosques constituyeron en sus comienzos el punto focal de la iniciativa, pero como se establece en las preguntas que se intenta responder el objetivo del programa del Foro toca con lo ambiental en su sentido más amplio, aunque es claro que los ecosistemas boscosos ocupan un lugar central en el examen que se hace en las diversas contribuciones de la presente

obra, dado el significado crítico que tienen en el paisaje colombiano.

LOS ENSAYOS INCLUIDOS EN ESTE LIBRO

Este libro contiene diez ensayos de igual número de autores a los cuales los une la preocupación por las relaciones entre la guerra, la sociedad y el medio ambiente. En su conjunto intentan responder las preguntas formuladas al principio de esta introducción, tarea para la cual no se planteó un marco teórico o un modelo único que sirviera a todos y cada uno de los autores para la construcción de sus contribuciones. Diversos marcos conceptuales, ideologías y metodologías subyacen a lo largo de los capítulos del libro, un asunto que no es el producto del azar. Se trata de una opción deliberada que encuentra su fundamento en la orientación que se ha querido dar al Foro Nacional Ambiental, la institución propulsora de este proyecto. Siempre hemos considerado que una fructífera reflexión y análisis de la política ambiental colombiana debe hacerse a partir de la participación y diálogo entre actores de la sociedad civil con diversas formaciones, experiencias e ideologías. Esta es una visión que consideramos válida para el tratamiento del tema que nos ocupa, más aún si se trata de comenzar a otear un campo de tanta complejidad y tan poco explorado en Colombia.

El libro se inicia con el ensayo de Alfredo Rangel "*Naturaleza y dinámica de la guerra en Colombia*". A similitud de los otros autores del libro, subraya que las regiones de frontera de ocupación del país se han caracterizado por la poca gobernabilidad que se genera por la combinación de su complejidad geográfica y de la escasa presencia del Estado en las cabeceras de los entes territoriales, una situación que antecede al conflicto armado. Rangel

señala tres factores fundamentales para entender el despliegue y alcances de la insurgencia dentro de la dinámica del conflicto: el apoyo popular, el medio ambiente físico y el tiempo. El autor privilegia el significado estratégico que para la insurgencia tiene el factor físico-ambiental con respecto al cual menciona las diferencias regionales que ofrece el país, en términos de las condiciones topográficas y climáticas y la presencia de cubiertas boscosas, así como de las condiciones relativas de desarrollo y accesibilidad. Pero la relación de la insurgencia con el medio natural adquiere diferentes características en sus diferentes etapas de su desarrollo que se inicia con la implantación de la guerrilla en una zona selvática y aislada, seguida por la de hibernación, dos etapas estas en las cuales los criterios de ocupación de territorios eran básicamente geoestratégicos con el fin de mantener sus propias fuerzas. A comienzos de los años ochenta la guerrilla entra en una dinámica de expansión, y la ubicación territorial estará marcada en gran medida por el objetivo de extraer los excedentes económicos de bonanzas económicas procedentes de actividades legales e ilegales, con el fin de financiar su fortalecimiento en términos de número de hombres, equipamiento y capacidad operativa: “las plantaciones de coca en Putumayo, Caquetá y Guaviare; la explotación de petróleo en Arauca; las minas de oro en el nororiente antioqueño y el sur de Bolívar; las plantaciones de banano en Urabá; minas de carbón en el Cesar y las plantaciones de amapola en las montañas de Cauca y Tolima fueron los sitios de expansión privilegiada de la guerrilla colombiana”. En la medida en que la guerra se ha intensificado y la guerrilla (y también los paramilitares) han requerido de mayores recursos económicos, la explotación de estas fuentes se ha intensificado, y los actores armados ilegales se han transformado en explotadores directos de las mismas. Y todo ello con graves daños para el ambiente, como

se tipifica en los casos de los cultivos ilícitos y en la extracción del oro. Pero como se argumenta a lo largo del ensayo la ubicación de la insurgencia en el territorio no solamente obedece a criterios económicos porque en últimas, la geografía de Colombia con su enorme complejidad “es un elemento clave desde el punto de vista táctico y estratégico que juega en favor de la guerrilla y en contra del gobierno”.

El ensayo de Darío Fajardo, *“El conflicto armado y su proyección en el campo”*, parte del supuesto de que el contexto del conflicto armado en el que se plantea el tema ambiental hace necesario abordarlo en torno a una noción de “territorio” que incorpore tanto los recursos como la espacialidad de las sociedades, su interpretación y valoración (identidad), así como las relaciones políticas construidas en torno a estos espacios (territorialidad). Desde esta perspectiva el tema ambiental no corresponde entonces solamente al inventario de los recursos sino, fundamentalmente, a su disposición y a sus relaciones en el espacio, a su significado para una sociedad y unas comunidades determinadas, y a los conflictos generados en torno a su control.

En el ensayo se presenta una amplia evidencia sobre cómo el desarrollo agrario ha estado caracterizado, entre otros, por el proceso de concentración de la propiedad rural y los desplazamientos forzados. Sobre estos últimos indica que existen los suficientes indicios como para afirmar que se encuentran ligados a ordenamientos estructurales de la apropiación de la tierra y otros recursos estratégicos y no a simples situaciones coyunturales. Estos fenómenos y otros comportamientos de la economía permiten al autor sugerir una hipótesis general sobre las relaciones “población-territorio”: “los sectores dominantes del país, ante la magnitud del territorio y el número relativamente reducido de sus habi-

tantes han optado por restringir el acceso a la tierra y a los mercados a la población rural (campesinos, afrodescendientes e indígenas). Esta política ha limitado las posibilidades de estabilización de estas comunidades en las áreas tradicionales de asentamiento campesino, afectadas por la reducción de sus parcelas, la pérdida de suelos, aguas y biodiversidad, derivadas de las condiciones tecnológicas precarias de las explotaciones y por la expansión del latifundio, que no genera ni producción ni empleo, forzándolos a constituirse en mano de obra itinerante en mercados laborales ‘circulares’ (campo-ciudad)”.

Para Fajardo, la ampliación del conflicto armado en la última década está estrechamente vinculada a estos procesos, y su solución debe incorporar estrategias para la construcción de nuevas relaciones campo-ciudad que incluya la estabilización de las poblaciones rurales en condiciones que satisfagan sus derechos fundamentales. Precisamente, el ensayo finaliza con “una propuesta ampliada de seguridad alimentaria” como estrategia para lograr tal propósito. Conllevaría un proceso de ordenamiento del territorio orientado hacia la racionalización de la ocupación del espacio, que, entre otros, permitiría la recuperación de ecosistemas frágiles y ricos en biodiversidad ocupados hoy en condiciones de gran precariedad social y ambiental. Se tendría que reubicar a quienes hoy los habitan en espacios adecuados para su desarrollo económico y social, pero se excluiría, de todas formas, cualquier acto de expulsión violenta.

El ensayo de Germán Andrade, “*Selvas sin Ley. Conflicto, drogas y globalización de las causas de la deforestación de Colombia*”, parte de un marco conceptual elaborado a partir del estado actual del conocimiento de las ciencias ambientales en materias fundamentales como la ecología de los ecosistemas, la ecología

humana de las selvas habitadas, las perturbaciones en el ecosistema forestal dentro de los límites de su estado normal de equilibrio, y las perturbaciones que llevan al ecosistema a estados diferentes del equilibrio normal (ej. fragmentación). A partir de este marco conceptual supera con amplitud el simplismo con el cual han sido predominantemente tratados los impactos ambientales del conflicto armado y los cultivos ilícitos en los ecosistemas boscosos.

Andrade señala que el conflicto en el país tiene desde su inicio una dimensión ambiental como se expresó desde sus orígenes en la zona andina en donde la tierra no es el único recurso que ha estado en disputa, sino en general el uso de los recursos naturales; la crisis de la economía campesina en esta región, estimulada en gran parte por aquel hecho, contribuyó a la movilidad interna de un sector de la población, en momentos en que la frontera agrícola del país estaba abierta. Andrade destaca cómo, en general, la discusión de la dinámica social en el agro colombiano, y en especial en las economías de frontera, así como la “violentología” al centrar el análisis de los procesos en los aspectos social y político “ha podido enmascarar determinantes explicativas importantes en el ámbito de la ecología humana”. A esta tendencia corresponden los planteamientos efectuados por Alfredo Rangel en el artículo antes presentado; según Andrade “Rangel desde la perspectiva del estratega, ve el monte como un refugio estratégico para la insurgencia, visión que podría explicar parte de lo militar en el conflicto. Pero la selva tiene también la función de proveedora de recursos naturales (suelos, materiales de construcción, proteína animal, etc.), sustentando las primeras fases de construcción de economías campesinas”. Para Andrade, en diferentes regiones del país la selva en su función múltiple de despensa, refugio y territorio ha sustentado la expansión campesina y de las fuerzas insur-

gentes primero en el periodo 1948-1971, señalado por Rangel como las etapas de implantación e hibernación de las guerrillas, y posteriormente en los nuevos procesos de colonización y de expansión de la guerrilla acontecidos en los últimos treinta años.

Esta larga presencia humana en la selva habría generado fuertes impactos sobre la población de algunas especies vegetales y animales. Para el autor, es muy probable que en la selva haya sobreexplotación de poblaciones de fauna como fuente de proteína para las grandes concentraciones humanas que allí habitan, incluyendo los grupos armados ilegales y las fuerzas regulares del ejército. Este fenómeno de defaunación, sobre el cual se poseen sólidos indicios pero muy poca información cuantificada, estaría causando la degradación de muchos de los ecosistemas boscosos (como consecuencia, por ejemplo, de la desaparición o disminución de dispersores críticos de las semillas). Se subraya aquí esta hipótesis de Andrade toda vez que por lo general el deterioro ambiental vinculado con el conflicto armado sólo se mira desde la perspectiva de la deforestación.

En particular, Andrade examina la deforestación en relación con la dinámica que conforma la expansión de la frontera agrícola mediante la colonización, el proceso de ganaderización, y los cultivos ilícitos. Para él la alta vulnerabilidad de la vida campesina de frontera de bosque tropical en términos económicos y ecológicos hace propenso al colonizador a incorporar cultivos ilegales, o cualquier otra actividad que le genere recursos, incluida la venta de su mejora a capitalistas en pos de territorios para establecer haciendas ganaderas. La dinámica social de los cultivos ilícitos, sus relaciones con el conflicto y sus consecuencias ecológicas son temas que ocupan una parte importante del artículo.

Además de Germán Andrade, el tema de los cultivos ilícitos y sus impactos socio ambientales lo examinan también Ricardo Vargas y César Ortiz, en artículos especializados sobre la materia. Como se sabe, los cultivos ilícitos fueron en sus inicios un fenómeno relativamente aislado del conflicto armado, pero desde entonces estuvo vinculado con los mercados internacionales. Hoy se encuentran profundamente imbricados en la guerra como fuente principal de financiación de los grupos guerrilleros y paramilitares. Además esta última identificación ha ocasionado que el actual gobierno haya adoptado la erradicación de los cultivos como estrategia fundamental para debilitar la insurgencia, una acción que se inició sistemáticamente en el gobierno del presidente Pastrana.

Para Andrade, el impacto ambiental de los cultivos ilícitos va más allá del área directamente talada para su establecimiento. Las consecuencias de la fumigación parecen subestimarse. Algo similar ocurre con el uso de los pesticidas para su cultivo y de los químicos para su procesamiento. Pero el mayor efecto ambiental del cultivo se encuentra en su carácter itinerante causado principalmente por las políticas de erradicación. Es un hecho que se materializa en la migración del cultivo entre Bolivia, Colombia y Perú. Y es un hecho que se expresa también en el ámbito interno en la metástasis del cultivo a diferentes regiones del país como consecuencia directa de la fumigación, asunto que examina a profundidad en relación con sus graves y diversos impactos ecológicos.

Ricardo Vargas, en su artículo *“Fumigaciones y política de drogas en Colombia: ¿Fin del círculo vicioso o un fracaso estratégico?”*, se concentra en el re-examen de la política de interdicción de los cultivos ilícitos en nuestro país. Basado en una com-

pleta información estadística, presenta entre sus conclusiones que como consecuencia de la intensificación de la erradicación mediante la fumigación, en el contexto del “Plan Colombia”, se ha transitado de una situación en la cual los cultivos se encontraban concentrados espacialmente en unos pocos departamentos, a una situación en la cual se han establecido cultivos en departamentos que antes no participaban en la actividad, o lo hacían marginalmente. Las evidencias que trae sobre el particular refuerzan las observaciones de Andrade sobre el actual patrón itinerante de los cultivos, con sus perversas consecuencias ambientales, un tema que también trata César Ortiz.

Vargas examina las relaciones entre la fumigación y el desplazamiento forzoso para concluir que si bien no se puede establecer una relación monocausal entre aquél y éste, “las fumigaciones son un agravante de los impactos de la guerra en la población civil y contribuyen a incrementar las razones de la diáspora de las poblaciones que sufren las dos dinámicas, presentes en los escenarios de la confrontación armada.” Vargas toma el caso de los expulsados del Putumayo en el periodo 2000-2001 y analiza lo que pasó con el grupo de personas que emigraron hacia Pasto desde el punto de vista de sus ingresos, tenencia de vivienda y acceso a los servicios sociales, para concluir que ellas se encuentran ahora en condiciones de mayor exclusión y desarraigo y con muy pocas oportunidades de superar su situación. A estos efectos sociales, suma un balance ambiental en relación con diversos efectos perversos de la fumigación, para subrayar cómo este conjunto de impactos no ha sido incorporado en la evaluación internacional y nacional de la política de erradicación que se centra en sumar la cantidad de hectáreas fumigadas. De hacerlo seguramente estaríamos ante un fracaso estratégico como el título del artículo lo sugiere.

César Ortiz, en su artículo *“Agricultura, cultivos ilícitos y medio ambiente en Colombia”*, muestra cómo la política pública se orienta crecientemente hacia el castigo de la sociedad rural como medio de control social del crecimiento de los cultivos ilícitos, “lo cual le impide reconocer la compleja diversidad ambiental, económica y social de los territorios afectados por esta problemática, su población diversa, que aborda múltiples actividades y estrategias de sobrevivencia y que continúa apropiándose y transformando territorios que han ocupado, a pesar de las fuertes intervenciones externas”. Al examinar la dinámica del cultivo y de la política de erradicación de la amapola y la coca en Colombia, concluye que al ignorarse en la política pública la prevalencia de pequeños cultivadores y adelantar un tratamiento delincencial homogéneo para todos los actores, se está profundizando la ilegitimidad del gobierno nacional en los territorios productores. Ortiz, a similitud de los otros autores del libro, examina las negativas consecuencias económicas y sociales que para los campesinos ha tenido la erradicación, así como las graves consecuencias ambientales de diverso orden. Uno de sus aportes centrales es el de mostrar el dolor que en las poblaciones campesinas genera la estrategia de fumigación utilizada por el gobierno, un aspecto que ilustra con elocuentes estudios de caso. Es el sufrimiento que se deriva de las consecuencias económicas y sociales que para las familias tiene la destrucción de sus cultivos de pancoger inflingida por la fumigación indiscriminada de sus parcelas que muy frecuentemente se caracterizan por tener una estructura productiva de policultivo, o como consecuencia de la drástica disminución de los ingresos monetarios procedentes del cultivo de la coca y amapola para los campesinos asociados a él en diferentes papeles (propietarios de la parcela, raspachines, etc.). Naturalmente el mayor dolor y desgarramiento se produce con el desplazamiento detonado

por la fumigación, fenómeno este que sumado a los anteriores están teniendo como efecto una mayor exclusión social y marginalización ecológica de diversos grupos de la población. Son fenómenos que, según el autor, la sociedad en general está cada vez en menor posibilidad de percartarse ante su creciente acostumbramiento a aceptar la fumigación como un hecho ineluctable que está vinculado al prohibicionismo y la criminalización de los psicoactivos ilícitos impuesto por los principales países desarrollados en donde se consumen.

En los artículos de Manuel Rodríguez Becerra y Hernán Darío Correa se examinan la forma y las consecuencias de la puesta en marcha de dos políticas ambientales –reforestación comunitaria y parques con la gente–, en medio de la guerra, en un período en el cual (los años noventa y principios de la presente década) se fortaleció la gestión ambiental en Colombia (Rodríguez y Espinoza, 2002). Se trataría de un caso excepcional a nivel global, puesto que en los países en los cuales se han producido conflictos armados similares al de Colombia, la gestión ambiental se ha debilitado como lo indican recientes experiencias latinoamericanas –El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Perú–, así como lo acontecido en el África -Angola, Rwanda, el Congo.

En el último decenio se llevó a cabo un programa de reforestación, con énfasis en la protección de las cuencas hidrográficas que abastecen los acueductos municipales que cubrió una extensión aproximada de 137.000 has. Ese programa, por su tamaño el mayor de esta naturaleza desarrollado en la historia del país, se realizó con comunidades rurales pobres ubicadas predominantemente en regiones víctimas del conflicto armado. En el artículo de Manuel Rodríguez, “*Reforestación comunitaria y conflicto*” se intenta explorar las circunstancias que permitieron la realiza-

ción de esta política en zonas especialmente conflictivas situadas en Santander del Norte, Antioquia y la Amazonia. En particular se identifican y analizan los roles jugados por los grupos guerrilleros, los paramilitares y las entidades gubernamentales, así como las circunstancias propias de la guerra en cada localidad. Se subraya que las comunidades parecen haber encontrado en la reforestación de las microcuencas un proyecto colectivo para la reafirmación de sus derechos territoriales, lo que se considera como la principal explicación de su compromiso con su adaptación a las circunstancias locales y con su ejecución. El artículo muestra a la vez la existencia de comunidades que sueñan y creen en un futuro mejor, que ellas consideran están en capacidad de construir, y las condiciones trágicas en que desenvuelven sus vidas como víctimas de violencias indecibles a menudo orientadas a buscar la expulsión de su territorio. La conservación y restauración de microcuencas como proyecto comunitario, se plantea en últimas como una estrategia que puede asegurar la continuidad de la gestión ambiental en medio de la guerra. Más importante aún, se plantea como un punto de encuentro entre grupos en conflicto y por consiguiente como una modalidad con grandes potencialidades para construir la paz.

El artículo sobre la política de Parques con la gente, de Hernán Darío Correa, analiza la forma como en Colombia se ha conceptualizado y puesto en marcha este enfoque particular de gestión de las áreas protegidas, el cual es el producto de un movimiento internacional que ha tomado especial fuerza desde principios de la década de 1990 y que busca sustituir el paradigma tradicional subyacente a la administración de los parques nacionales. Este último se originó hace más de cien años y en el caso de las Américas sus fundamentos se encuentran en la Convención del

Hemisferio Occidental de la Unión Panamericana (1945) que a su vez se inspira en el modelo norteamericano de “Yellowstone”; en su esencia proclama que la conservación de los parques se garantiza en la medida en que la intervención humana esté ausente, reduciendo el rol de la gente a actividades controladas de contemplación, recreación e investigación.

Los parques con la gente encuentran sus fundamentos en nuevas concepciones sobre el significado de los bienes públicos y el papel de la sociedad civil en su producción, así como en los nuevos principios, orientaciones y programas que sustentan el propósito global de conservar y hacer uso sostenible de la diversidad biológica, incorporados en diversos tratados multilaterales. Precisamente Correa en su artículo identifica y examina en detalle los seis elementos conceptuales constitutivos de la política colombiana de parques con la gente, construida y puesta en marcha en el período 1998-2002, y las potencialidades de estos elementos respecto de una política pública de gestión ambiental y de conservación. Sus planteamientos parten de una conceptualización de territorio y territorialidad, en la cual se inserta y articula la dimensión ambiental, que en gran parte coincide con las líneas básicas sobre el particular subyacentes en el artículo de Darío Fajardo. Además, Correa identifica seis proyecciones potenciales de la nueva política entre las cuales se destacan aquí la posible superación de las conflictividades territoriales históricas, la posible continuidad de la gestión ambiental en medio del conflicto, y la construcción pública de dolientes sociales y comunitarios del tema de la conservación, en un proceso de paz y hacia una nueva constituyente. No se trata solamente de potencialidades: la puesta en marcha de la política durante cuatro años generó suficientes indicios sobre su eficacia en los campos mencionados. Pero al leer el ar-

título aparece claro el alto riesgo existente de que la política de parques con la gente se degrade e inclusive llegue a desaparecer como consecuencia de la política de seguridad democrática del gobierno del Presidente Álvaro Uribe. Esta última contiene fundamentos en abierto conflicto con aquellos correspondientes a la política de parques con la gente que podrían conducir a esta a transformarse en forma tal que quizá llegue a volverse irreconocible.

El artículo “*Vías, bosques y conflicto social en Colombia*”, de Carlos Castaño Uribe, va mucho más allá de lo que su título sugiere. En efecto a lo largo del mismo explora un conjunto de premisas sobre el significado y consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales del establecimiento de vías de comunicación, en particular carreteras, que como se sabe han sido tradicionalmente uno de los ejes fundamentales del desarrollo y de transformación del territorio. Como señala el autor, “desde hace muchas décadas las vías han sido un factor determinante en la alteración de los bosques naturales del país y en la destrucción de los recursos naturales, particularmente por las dinámicas antrópicas que imprime al territorio”. Evidentemente las vías han propiciado la colonización de diversas zonas de frontera del país, pero a su vez muchas veces aquellas han sido construidas para comunicar asentamientos humanos producto de la colonización con las regiones más desarrolladas del país, un hecho que a su vez ha detonado la profundización del proceso colonizador.

Pero para Castaño Uribe, las vías son también medios para la paz o para la guerra, toda vez que han sido utilizadas por sus diferentes actores como instrumentos estratégicos para inclinar el conflicto a su favor. Así, por ejemplo, su control por parte del gobierno o de los grupos insurgentes, o de los paramilitares, significa la

posibilidad, o no, de movilidad de determinados grupos de la sociedad. El significado de las carreteras para los actores de la guerra, se tipifica, como lo anota el autor, en el establecimiento por parte de la insurgencia de sus propios proyectos viales como parte de su estrategia para la consolidación y dominio del territorio que incluye vías para la exportación de las psicoactivos ilícitos. O en otras palabras, el establecimiento y control de las vías ha estado profundamente vinculadas con el conflicto por el control del territorio. En últimas, como lo anota Castaño, las vías deben ser un elemento articulador de los procesos colectivos de construcción del territorio, un hecho que debería ser pieza fundamental en el necesario proceso de ordenamiento del territorio, señalado por Fajardo en su artículo, como uno de los imperativos estructuradores de la paz. Este proceso estaría orientado hacia la racionalización de la ocupación del espacio que incluiría entre otras una visión sobre la conservación y uso sostenible de los bosques de Colombia.

En su artículo *“Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia”*, Alfonso Avellaneda plantea diversas actividades asociadas con la explotación y transporte del petróleo como uno de los factores que se encuentra en los orígenes de múltiples conflictos sociales y políticos de Colombia, incluyendo el armado. Unas veces esos conflictos se han detonado por la expulsión de poblaciones indígenas y campesinas de los territorios que han ocupado tradicionalmente (que son el origen y razón de ser de las culturas de aquellas o de las identificaciones sociales de estas), como consecuencia de la actividad petrolera. Así ocurrió a principios del siglo pasado en el Catatumbo con los indígenas motilonos, y más recientemente con los indígenas kofanes en el Putumayo. Otras veces han sido generados por procesos de colonización detonados por el establecimiento de la actividad en zonas totalmente despo-

bladas o con muy baja densidad poblacional, así como por la erección de las economías de enclave propias de esta industria con las secuelas sociales que generan.

Muchas veces los conflictos han sido originados por los daños ambientales infligidos por la industria a valiosos ecosistemas, como se tipifica en la apertura de zonas boscosas para efectos de exploración o explotación del petróleo, o en la contaminación de los ríos y las ciénagas del Magdalena Medio; este último hecho, en particular, ha tenido graves consecuencias para las poblaciones campesinas y de pescadores cuyas identidades territoriales y culturales, así como la satisfacción de sus necesidades, están profundamente arraigadas a estos ecosistemas lacustres. Además, diversos grupos sociales han tomado como uno de los fundamentos de su lucha política el rechazo al otorgamiento de la explotación del petróleo al capital extranjero, un elemento que hace parte de la plataforma de reivindicaciones del Ejército de Liberación Nacional. Esta última se ha expresado en los atentados dinamiteros contra los oleoductos que, como se sabe, han producido graves daños ambientales, sociales y económicos. Avellaneda analiza cada uno de estos fenómenos e intenta dilucidar las interrelaciones existentes entre la explotación del petróleo, el territorio (y la territorialidad), el medio ambiente y el conflicto armado.

Finalmente, el libro concluye con el artículo de Guillaume Fontaine *“Enfoques conceptuales y metodológicos para una sociología de los conflictos ambientales”*. Se trata de un ensayo de reflexión conceptual y metodológica orientada hacia “una sociología de los conflictos ambientales”, construida a partir del análisis de las condiciones de la explotación petrolera en el Ecuador y Colombia, en particular en la región amazónica. El autor considera que muchos de los análisis son el objeto de la influencia, a

veces arrolladora y sofocante, de la teoría económica que ve los conflictos socio-ambientales fundamentalmente en términos de una lucha por los recursos escasos; este tipo de enfoque (ej. teoría de las elecciones racionales, teoría de juegos) reduce las dimensiones sociales, ambientales o culturales a un papel subordinado o marginal frente al ámbito del conflicto mayor que es definido como de naturaleza económica.

Para Fontaine, desde el punto de vista ideológico cualquier bloque petrolífero es el escenario de confrontación entre quienes defienden el medio ambiente y entre quienes defienden el desarrollo, a partir de interpretaciones contradictorias del concepto de desarrollo sostenible: “para unos significa que el desarrollo tiene que estar subordinado a las poblaciones locales, mientras que para otros el desarrollo es ante todo una lucha contra la pobreza y tiene que satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales”. Entre ambas opciones se insertan además dos dimensiones que han adquirido una creciente importancia en la última década, la etnicidad y la globalización. Y en la medida en que se fortalece la organización de los principales actores involucrados (las compañías petroleras, el Estado y los actores sociales, entre los cuales se identifican los indígenas, los colonos y los ambientalistas), “se conforma un complejo de alianzas en el centro del cual la ética cumple con una función de legitimación por la lucha por el poder”. Los actores, de acuerdo al autor, ubican estos cuatro elementos conforme a tres dimensiones de la acción social: un marco referencial (o la aproximación particular de cada actor al significado del territorio en donde se ubica el campo petrolífero o el destino de sus productos), una racionalidad instrumental o lógica de acción (o aquella en que preferentemente se ubica cada actor: política, económica, ética), y un marco normativo (o el que prioriza o valoriza cada

actor: derecho público, derecho privado, derecho internacional y derechos colectivos, etc.). Como bien lo anota Fontaine, lo que está en juego en estos conflictos “no es tan fácil de definir como para permitir describir de antemano un espacio de negociaciones dentro del cual los actores puedan sentarse alrededor de una mesa para intercambiar sus puntos de vista en cuanto a su situación”. En últimas, como es evidente en los diferentes ensayos de este libro, en el conflicto se enfrentan también concepciones diversas y muchas veces excluyentes sobre el destino del país y sus regiones.

* * *

Al efectuar la anterior revisión de los ensayos contenidos en este libro, aparece clara la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas a partir de la prolongación de la guerra, junto con la inutilidad de la política antidrogas basada en la fumigaciones, así como las negativas consecuencias generadas por el aplazamiento de una profunda reforma agraria y de un definitivo reordenamiento territorial del país que dé cuenta de la riqueza de nuestra diversidad, y al mismo tiempo de la fragilidad y de la complejidad de nuestros recursos naturales y de nuestros espacios geográficos. Se ha hecho también evidente la indiferencia y la no consideración estratégica de la dimensión ambiental de nuestros problemas nacionales, por parte de los actores políticos gubernamentales, de la oposición o de la insurgencia; junto con las incipientes fortalezas de las búsquedas locales que se levantan desde certezas y tradiciones culturales afincadas en territorios y paisajes aún persistentes en su diversidad. Estos parecen ser los puntos hacia donde convergen los ensayos presentados, cuyas potencialidades más profun-

das se dejan ahora en manos de los lectores, que a lo largo de su lectura encontrarán muchas luces, pero que seguramente encontrarán también la sombras inherentes a un tema cuya exploración es aún incipiente.

REFERENCIAS

- El Tiempo* (2003). “¿Dónde está la Política Ambiental?”, Editorial. Diciembre 25.
- FNA (Foro Nacional Ambiental) (2001). “Documento de trabajo: proyecto Guerra, Medio Ambiente y Paz”. Bogotá, D.C., FNA, mimeógrafo.
- GARAY, Luis Jorge (2001). *Repensar a Colombia*. Bogotá, Libros de Cambio, Alfaomega.
- GASSANA, James, K. (2002). “Natural Resource Scarcity and Violence in Rwanda” En Mathew, Richard, *et al.*, *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*, Winnipeg: International Institute for Sustainable Development and UICN—The World Conservation Union.
- HOMMER-DIXON, Thomas F. (1999). *Environment, Scarcity, and Violence*. New Jersey, Princeton University Press.
- KAIMOWITZ, David (2002). “Resources, Abundance and Competition in the Bosawas Biosphere Reserve, Nicaragua”, en Mathew, Richard, *et al.*, *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*, Winnipeg, International Institute for Sustainable Development and UICN—The World Conservation Union.
- McNEELLY, James. A. (2002). “Biodiversity, Conflict and Tropical Forests”, en Mathew, Richard, *et al.*, *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*, Winnipeg, International

Institute for Sustainable Development and UICN–The World Conservation Union.

MATHEW, Richard, *et al.*, *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*, Winnipeg, International Institute for Sustainable Development and UICN–The World Conservation Union.

MYERS, Norman (1993). *Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability*. New York, W. W. Norton

RODRÍGUEZ B., Manuel (2002). *El Futuro Ambiental de Colombia*. Bogotá, D.C. Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

RODRÍGUEZ B., Manuel y ESPINOZA, Guillermo (2002). *Gestión Ambiental en América Latina y el Caribe: Evolución, Tendencias y Principales Prácticas*. Washington, D.C. BID.

SANDS, Philippe (1994). *Principles of International Environmental Law*. New York, Manchester University Press.

SANTAMARÍA, Ricardo (2003). “Frenazo ambiental de Uribe”, en *Lecturas Dominicales, El Tiempo*, diciembre 25.

UN (1992). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*. New York, United Nations.

WCED (World Commission on Environment and Development) (1987). *Our Common Future*. Oxford, Oxford University Press.

WOLF, Aaron (1997). “International Water Conflicts and Conflict Resolution: Water’s War and Water Reality”, en *Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science*. Seattle, Washington.